

¿Golpe a las finanzas ETA?

MIGUEL ANGEL AGUILAR

El Gobierno de Zapatero tiene que lidiar cada día con un nuevo comunicado de la banda terrorista ETA, que parecería haber encontrado en la letra impresa una nueva munición para su peculiar ¡fuego a discreción!. Mientras, la oposición del PP se emplea a fondo en deslegitimar el proceso del final dialogado de la violencia terrorista con el recurso grosero a la ley del embudo: ellos pudieron intentar cualquier cosa pero los socialistas deben ser impedidos de cualquier intento, además de ser tildados por adelantado de traidores genuflexos que entregan el Arca de la Alianza a los asesinos.

El público de a pie ignora cuáles son los intentos en marcha promovidos por Moncloa, pero surgen noticias alentadoras como, por ejemplo, las detenciones que se han hecho esta misma semana en Francia y en España de los responsables del aparato económico que nutre y gestiona las finanzas de ETA.

Como escribía un buen amigo periodista en la edición de Cinco Días del 15 de octubre de 2004 (véase la columna titulada *Las cuentas de ETA* en la página 22), siempre nos ha desconcertado la penumbra en que ha permanecido un capítulo tan decisivo como el de las finanzas de ETA. Una y otra vez hemos tenido noticia de la desarticulación de comandos o de las sucesivas cúpulas, del hallazgo de zulos con arsenales de armas y explosivos fotografiados junto al logotipo del cuerpo policial responsable de la captura. Hemos sido informados de la aparición de troqueladoras para falsificar matrículas, de pisos, de garajes y de otras infraestructuras utilizadas por la banda, pero entre tanto apenas han aparecido rastros de las finanzas de la organización terrorista.

Sólo teníamos a partir de la documentación incautada por la policía a la cúpula de ETA el 3 de octubre de 2004 el dato de que el entonces jefe de la banda, Mikel Antza, manejaba un presupuesto anual de 1.200.000 euros, es decir, que repartía unos 100.000 euros mensuales para hacer frente a los gastos corrientes de la banda, sin incluir las partidas destinadas a la compra de armamento y explosivos ni las destinadas a subvencionar las organizaciones de su entorno. Unas cifras que confirmaban las estimaciones adelantadas por el entonces jefe del gabinete técnico del director general de la Guardia Civil, Ignacio Cosidó, en el XIV Seminario Internacional de Defensa que convocó la Asociación de Periodistas Europeos en junio de 2002 bajo el título de *El terrorismo, una amenaza del siglo XXI*.

Según Cosidó, a la cifra anterior deberían añadirse otros 60.000 euros mensuales que corresponderían a gastos de los enlaces utilizados para dar información o para transportar elementos logísticos necesarios para los comandos operativos.

En definitiva, venía a conformarse que el terrorismo es de bajo coste, con cifras de alrededor de 5.000 euros puestas a disposición de un comando para iniciar sus atentados y con una dotación de mantenimiento anual cifrada en 18.000 euros. Es decir, que la banda ha sido de una austeridad estricta con los terroristas que disparan o accionan explosivos. Por eso, con referencia a quienes orbitan dentro del magma de los fervores etarras serían excesivas expresiones como la de *asesinos a sueldo*. Se trataría más bien de *asesinos*

por convicción que piensan estar cumpliendo un deber. Y ya se sabe que las convicciones se han de poner a disposición de la organización en la que se milita con pleno desprendimiento económico, gratuitamente, sin esperar recompensa monetaria alguna.

Todas estas austeridades económicas se reservan a los entusiastas de primera línea, que cristalizan en el sistema del fanatismo más blindado, como el exhibido por Txapote durante el juicio oral en la Audiencia Nacional, pero en absoluto son de aplicación cuando se trata de compensar otros servicios alejados de la acción directa, que buscan sostener o incrementar la influencia política de la banda a través de todo un ingenioso tejido de organizaciones concéntricas de afines asimilables.

Otro renglón muy oneroso lo constituyen las clases pasivas, es decir, las pensiones abonadas a cerca de 5.000 personas que hicieron sus trabajos para la banda sin cotizar a la Seguridad Social. Esperemos a saber con más exactitud la importancia del golpe de esta semana a las finanzas de ETA para evaluar el quebranto causado a la banda. Continuará.

Periodista

Cinco Días, 23 de junio de 2006